

EL NAVARRAZO, UN GOLPE A LA CÓRDOBA COMBATIVA

Alicia Servetto

(Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba)

1. Presentación

*“En estos momentos, lo que hay en Córdoba, ustedes, saben, es un foco de infección. Se están produciendo algunas fuerzas que son tan enemigas de las 62 como del gobernador y entonces ¿qué ocurrirá si el gobernador y las 62 se pelean? El que toma ventaja es el enemigo y nosotros no lo tenemos que dejar”.*¹

En estos términos se dirigió el Presidente Juan D. Perón, el 20 febrero de 1974 a los integrantes de la mesa directiva de las "62 organizaciones" nacionales y al secretariado general de la CGT. La imagen del Presidente, como voz oficial, instalaba públicamente una representación del conflicto cordobés en términos implacables. La concepción de la sociedad como un cuerpo se condecía con la imagen organicista que prevalecía en las Fuerzas Armadas. Si el cuerpo social se enfermaba, requería la acción decisiva de los gobernantes, cuando no de las mismas Fuerzas Armadas consideradas la cabeza de ese cuerpo, para eliminar los “elementos patógenos” que perturbaban el normal funcionamiento. Por este motivo, a las infecciones, para la supervivencia del cuerpo, era necesario eliminarlas de forma urgente.

Ocho días después, el 28 de febrero, un golpe policial comandado por el jefe policía de la Provincia de Córdoba, Tte. Cnel. Antonio Navarro, con la colaboración de los sectores de la derecha peronista y del sindicalismo ortodoxo, destituyó al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador, Atilio López. El Jefe de Policía encarceló durante dos días a las máximas autoridades provinciales y a varios funcionarios más del Poder Ejecutivo imponiendo un virtual estado de sitio: persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, con la argumentación que debían controlar “las fuerzas enroladas en la extrema izquierda”. Alrededor de 86 personas fueron detenidas, pero los más buscados, Agustín Tosco y René Salamanca, lograron eludir la persecución. Fueron allanados domicilios particulares y estallaron artefactos explosivos en los domicilios de algunos detenidos y en varios locales sindicales, como el del SMATA.

El 1º de marzo el Presidente de la República respondió enviando al Congreso de la Nación el proyecto de intervención al Poder Ejecutivo de la provincia. Los objetivos eran claros: No restituir a las autoridades legítimas. El mensaje que acompañó al proyecto, argumentaba que las autoridades elegidas "no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función", y "sin percatarse se fueron alejando de la revolución auténtica":

¹ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 21-2-74.

"El gobierno toleró y hasta fomentó a veces, diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública."²

¿Qué lectura se puede hacer de este hecho para nada casual ni fortuito? ¿Qué significó la metáfora del "foco de infección", nada menos que ante la dirigencia sindical nacional en claro enfrentamiento con la dirigencia obrera cordobesa? ¿Cuáles fueron los marcos habilitadores que permitieron que los hechos se desencadenaran de esa forma?, ¿Qué actores participaron y qué relación se entabló con el gobierno provincial?

En este trabajo nos proponemos desandar estos interrogantes para tratar de analizar e interpretar lo sucedido en Córdoba aquél febrero de 1974, cuyos hechos pasaron a ser conocidos como "el navarrazo", "el botonazo" o, en su mejor explicación, "el contracordobazo".

2. La victoria de Obregón Cano y Atilio López: la fórmula de la revolución insatisfecha

El 25 de mayo de 1973 asumió Ricardo Obregón Cano como gobernador y Atilio López como vicegobernador, electos en segunda vuelta con más del 50% de los votos. La victoria de la fórmula Obregón Cano – Atilio López en la provincia era el resultado de una sociedad movilizada que vivía los efectos de una intensa radicalización ideológica y política alimentada por las combativas luchas sindicales, las demandas estudiantiles y el accionar guerrillero. Este triunfo instalaba un punto de inflexión hacia el interior del peronismo y se proyectaba hacia el resto de la sociedad: implicaba la legitimación de la juventud radicalizada como actor decisivo en el proceso político interno y el reposicionamiento del ala combativa del movimiento obrero cordobés en el espectro político sindical.

La figura clave en esta fórmula gubernamental resultaba el dirigente sindical Atilio López, un referente del sindicalismo combativo y disidente de Córdoba, forjado al calor de las luchas obreras durante los años de la Resistencia Peronista y de los sucesos del "cordobazo" de mayo de 1969. Córdoba fue la única provincia donde el candidato a vicegobernador no representaba a la burocracia sindical. Obregón Cano y sus partidarios juveniles insistieron en que el representante de la rama gremial del peronismo en la boleta fuese Atilio López, líder de los legalistas. *"La presencia de Atilio López era importante, no porque fuera Montonero, sino porque Atilio López era un obrero, que representaba para nosotros ciertas palabras sagradas. Obregón fue candidato porque de alguna manera la juventud y este sector combativo del sindicalismo lo apoyó, y entonces con eso logró la mayoría"*.³

En rigor, Ricardo Obregón Cano había sido designado, en 1971, delegado del Consejo Superior Peronista para llevar adelante la tarea de reorganización partidaria. A partir de entonces, se organizó la Junta Promotora Provincial, la Junta Capital y las

² Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Año 1974, T.IV, p.3618 y ss.

³ Declaraciones de Ricardo Panzetta –dirigente de Montoneros-a la autora, 23-4-2001.

Juntas Departamentales, iniciándose, también, una gran campaña de afiliaciones y apertura de numerosas unidades básicas. Durante esta etapa, el peronismo local se reorganizó a partir de la confluencia de distintas vertientes políticas. A saber, una primera vertiente provenía de la línea del peronismo político, en la que se ubicaban dirigentes de vieja data como Julio Antún de la agrupación interna Mesa Redonda Permanente Peronista (en adelante MRPP), Raúl Bercovich Rodríguez del grupo "Unidad y Lealtad" y, Ricardo Obregón Cano, designado delegado del Consejo Superior Peronista, en 1971, para reorganizar el partido en Córdoba. Por cierto, entre estos dirigentes existían manifiestas diferencias. Mientras los dos primeros representaban el peronismo más ortodoxo, verticalista y nacionalista de derecha, contrarios a la participación de la juventud radicalizada en el peronismo, Obregón Cano, por su parte, manifestaba una posición política más centrista que recibía el apoyo de la izquierda del peronismo.

Una segunda vertiente la constituyó el sindicalismo local. A principios de los años setenta, el movimiento obrero de Córdoba estaba conformado por cuatro bloques gremiales de importancia: los ortodoxos, los legalistas, los independientes, y los clasistas. Los dos primeros eran de filiación peronistas. Los independientes estaban liderados por el dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco que reivindicaban un sindicalismo democrático, antiburocrático, con amplia participación de las bases. Los clasistas se encolumnaban detrás del SMATA conducido por René Salamanca. Los legalistas, independientes y clasistas compartían la dirección de la CGT Regional. El peronismo tenía su referente principal en las "62 organizaciones peronistas" que a su vez estaban divididas en dos corrientes: la ortodoxa y la "legalista". Los ortodoxos, se definían como los auténticos peronistas y exigían una central obrera bajo el control exclusivamente peronista. Controlaba alrededor de 20 gremios, y sus principales referentes eran Alejo Simó dirigente local de la Unión Obrera Metalúrgica y Mauricio Labat del gremio de los taxistas. Los legalistas, por su parte, se reconocían como leales a Perón, pero, en la práctica eran más independientes y pluralistas con respecto a la representación sindical. Cuestionaban el verticalismo a ultranza de los ortodoxos, buscando ejercer una representación más inclusiva de todas las corrientes sindicales del movimiento obrero en el seno de la CGT local. Su exponente más visible fue el secretario de la CGT regional elegido en 1971, Atilio López, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que controlaban alrededor de 26 gremios.

Las agrupaciones de la izquierda peronista, por su parte, constituyeron un actor central en la reorganización del peronismo provincial. Dentro de este grupo, podía identificarse a la Juventud Peronista, la Juventud Revolucionaria Peronista y, el Peronismo En Lucha. Estas agrupaciones trabajaban junto al Movimiento Revolucionario Peronista, y tenían vinculaciones estrechas con la organización armada peronista, Montoneros. La mayoría de ellos propiciaban la constitución de la "patria socialista", atraídos por las experiencias revolucionarias de Cuba, China, Argelia y la difusión de los escritos de John William Cooke sobre la redefinición del peronismo como agente de la revolución social.

En virtud del llamado a las elecciones internas (junio de 1972), todas estas vertientes realinearon sus fuerzas en alianzas para enfrentar la lucha por la conducción partidaria y la fórmula de candidatos para las elecciones provinciales. Este enfrentamiento "desobedecía" las directivas de Perón cuya orden había sido la de presentar en todos los distritos listas de unidad. Por un lado se formó la Lista Unidad encabezada por Ricardo Obregón Cano y Atilio López, apoyados por la estructura de la Juventud Peronista y el sector legalista de las 62 organizaciones peronistas, con la adhesión de un grupo de dirigentes políticos provenientes tanto del peronismo provincial como de otros partidos tales como la UCRI y el Movimiento de Acción Popular (MAP). Julio Antún, dirigente de la MRPP, y Alejo Simó, encabezaron la segunda lista. Absorbieron la mayor parte del peronismo tradicional y contó con el aporte del núcleo "Unidad y Lealtad" liderado por el dirigente Raúl Bercovich Rodríguez junto al sector ortodoxo de las "62". La lista "Unidad" se impuso en los comicios internos con la fórmula Ricardo Obregón Cano-Atilio López con el 60% de los votos, derrotando a Julio Antún, quien había exigido durante la campaña una conducción íntegramente ortodoxa.

De este modo, Obregón Cano y Atilio López concitaron la adhesión de los sectores más combativos y radicalizados del peronismo, convirtiéndose en el artífice de las ideas revolucionarias alimentadas por sus discursos preelectorales cuando afirmaba que se estaba preparando el camino hacia el socialismo. El mismo Peronismo Revolucionario, expresaba que el triunfo de Obregón Cano era la respuesta de un pueblo que quería marchar hacia el socialismo: *"queremos garantizar que el nuevo Gobierno vaya radicalizando sus posturas hacia una revolución netamente popular y social."*⁴

No obstante y, pese al apoyo de la izquierda peronista, fundamentalmente de la Juventud Peronista y Montoneros, ni Obregón Cano ni Atilio López representaban de modo excluyente al peronismo revolucionario. Por el contrario, una vez en el gobierno, las nuevas autoridades definieron una política de alianzas tendientes a la concertación de intereses que se plasmó, entre otras acciones, en la composición del gabinete con figuras provenientes de partidos moderados, en la elección de uno de los máximos dirigentes de la Democracia Cristiana como senador nacional del FREJULI, y en la suscripción con los legisladores radicales de una "acta de compromiso" en el que dejaron sentado la intención de llevar adelante una política de colaboración.

Ciertamente, existieron manifestaciones, por parte de las autoridades provinciales, tendientes a actuar en el marco de las instituciones constitucionales, que incluía, además, ampliar las bases del consenso inicial con miras a generar un pacto de gobernabilidad con la oposición que trascendiera la estructura movilizadora de los sectores radicalizados y la presión de la ortodoxia peronista.

Sin embargo, el gobierno de Obregón Cano fluctuó entre las demandas de una mayor radicalización de las políticas estatales por parte de la izquierda peronista y la presión de la derecha para ocupar los espacios de poder, por lo que la estrategia centrípeta de las autoridades provinciales, tendiente a la concertación, entró en

⁴ Declaraciones de Luis Miguel Baronetto. Revista *Posición*, Córdoba, Año I, N°5, mayo de 1973.

contradicción con las fuerzas centrífugas que polarizaron, de forma excluyente el escenario político nacional.

El efecto fue la formación de un arco opositor que involucró a importantes actores sociales y políticos de Córdoba. La jerarquía eclesiástica se movilizó contra la iniciativa de homologar el estatuto del personal docente de enseñanza pública y privada; los ganaderos protestaron contra la regulación de precios en la comercialización de la carne y, la policía impugnó la reorganización los cuadros policiales. Sin embargo, no fueron las tensiones generadas por estos actores lo que desestabilizaron al gobierno, restándole eficacia a su política de gobierno. Por el contrario, fue el conflicto sindical y la interna partidaria los que pusieron en jaque la estabilidad de las autoridades provinciales. Las medidas e iniciativas emprendidas fueron impugnadas por cada uno de los actores y sectores afectados y, cada nudo conflictivo evidenció la falta de efectividad del gobierno de Obregón Cano para resolver problemas que afectaban a amplios sectores de la población.

3. Córdoba: Capital de la patria socialista VS Capital de la patria peronista

El gobierno provincial tuvo que sortear serias dificultades que provinieron tanto de la derecha política peronista como de la ortodoxia sindical. Ambos sectores desplegaron una serie de acciones y discursos contra los gobernantes electos con el fin de provocar efectos desestabilizadores. Las situaciones conflictivas se acrecentaron a partir de la renuncia del presidente Héctor Cámpora en julio de 1973. Desde ese momento la derecha política y sindical, de forma articulada, lanzó una ofensiva destinada a recuperar el espacio político perdido en las internas de junio del '72, transformándose en un factor de poder con capacidad de presión y desestabilización que se proyectó más allá del ámbito partidario y gremial, invadiendo el resto de las esferas estatales.

3.1. El conflicto sindical por el control de la CGT

El triunfo peronista de marzo del 73 reformuló el conflicto entre las distintas vertientes del sindicalismo. El sector ortodoxo no sólo no contó con representación en la CGT local, sino que además tampoco acordó con las candidaturas de Obregón Cano y Atilio López. Más aún, se sentían cada vez más amenazados por la corriente de la izquierda revolucionaria peronista que movilizaba todo su aparato en respaldo de los conflictos obreros. Con la consigna “JTP, la nueva CGT”, Montoneros develaba las ambiciones hegemónicas de la organización, a través de la creación de su brazo “obrero”, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), que pretendía insertarse orgánicamente en el campo sindical. En consecuencia, el enfrentamiento entre los distintos sectores del sindicalismo peronista se desplegó, no sólo en impugnaciones mutuas en los planos políticos e ideológicos, sino y fundamentalmente, en distintas

formas de violencia con altos costos para la estabilidad institucional de la provincia y el país.

Varios episodios tuvieron lugar luego del triunfo electoral por lo que fueron aumentando el nivel de conflictividad en el sindicalismo local. Así, por ejemplo, el 13 de julio, día en que renunció el presidente Cámpora, un grupo identificado como "Auténticos Peronistas" tomó el edificio de la CGT por considerar "*que sé encontraba en manos espurias y decididamente antiperonistas*", a lo que se sumaron atentados a los locales de Luz y Fuerza y del SMATA. Por cierto, esta embestida se hacía en el marco de la disposición de la circular n°80/73 de la CGT nacional donde se comunicaba a las Regionales que desde el 1° de julio se dejaba sin efecto las conducciones de las delegaciones, instrumentando con ello una política de centralización y control.⁵

Con este marco normativo que, ciertamente, buscaba avanzar sobre las delegaciones disidentes, la CGT nacional junto a los gremios controlados por la ortodoxia sindical, se propusieron recuperar el control de la CGT local, dirigida en ese entonces por los gremios independientes, clasistas y legalistas. Sin duda el conflicto el control por la regional córdoba implicaba también un conflicto para el gobierno provincial, cuya fórmula ejecutiva estaba compartida por un representante del movimiento obrero. De hecho, el secretario general de la CGT-Córdoba, Roberto Tapia, afirmaba que el "*verdadero significado*" del compamiento de la sede gremial era "*preparar el terreno para una intervención al gobierno de Córdoba y un copamiento de la CGT regional*".

Los gremios de Luz y Fuerza y del SMATA, por su parte, caracterizaron estos hechos como parte de la ofensiva desatada por las bandas fascistas, al mando de López Rega, Rucci y la burocracia sindical porteña para provocar una situación que permitiera intervenir a la provincia de Córdoba desconociendo el pronunciamiento popular.⁶ Agustín Tosco, en sintonía con estas declaraciones, proclamó, en la inauguración del "Plenario Nacional de Defensa y Recuperación Sindical", que Córdoba sería "*la capital de la Patria Socialista*" con los compañeros peronistas para "*luchar contra el avance del fascismo y el macartismo, que son la reseña del cáncer que carcome desde hace tiempo al sindicalismo nacional*."⁷

Por su parte, la organización Montoneros, a través de su órgano de difusión, la revista *El Descamisado*, también fijó su posición con respecto al conflicto obrero de Córdoba. Si la izquierda peronista eran los infiltrados, los burócratas sindicales eran los traidores a las luchas populares. Ante la pregunta ¿Por qué aún se había intervenido Córdoba?, la revista respondía:

⁵ Diario *Córdoba*, 13 y 17-7-73. También, la nueva ley de asociaciones profesionales, sancionada en noviembre de 1973, que, entre otras cosas, ampliaba el período de mandato de las comisiones directivas y otorgaba a la CGT nacional facultades para intervenir las seccionales y los sindicatos locales, avanzó en la profundización de la centralización de la CGT central. Véase Mónica Gordillo "Los cambios en el escenario económico, social y político con la recuperación democrática", en Gordillo, Mónica (editora), *Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa*, Córdoba, Ferreyra Editor, 2001.

⁶ Diario *Córdoba*, 13, 15 y 17-7-73.

⁷ Diario *Córdoba*, 16-6 y 2-7 de 1973.

“Los planes de la burocracia traidora gremial de Córdoba aliado a los traidores del sector político que dirige Antún, habían convencido a los no muy lúcidos y leales peronistas Llambí y Lastiri, que Córdoba era una hoguera roja.

Los móviles eran bien explícitos: exigir la renuncia de Obregón y López o intervenir la provincia. Sin embargo, el copamiento y el fracaso del operativo –junto a la masiva respuesta de indignación del pueblo cordobés– hizo recular los planes de Rucci, Lastiri y López Rega.”

“(…) Si intervenían Córdoba tenían al pueblo justicialista en las calles y también al pueblo no peronista. Si por los tiros no habían intimidado a nadie, tampoco lo podrían hacer mediante decretos.”⁸

La palabra “intervención” se instaló tempranamente en el espacio político cordobés como variable de presión y desestabilización: “Hay infiltrados en el gobierno”, “el marxismo asalta los sindicatos desde la Casa de Gobierno”, “López y Obregón están entregados a los zurdos”, fueron las expresiones que sustentaban las acusaciones contra el gobierno provincial.

Sin embargo, a la imagen de Córdoba como “hoguera roja”, donde el gobierno provincial estaría copado por la “infiltración marxista”, se contrarrestaba con la negativa reiterada del gobernador acerca de la presencia de infiltrados en su gobierno. Con bastante frecuencia, Obregón Cano salía a la palestra pública y declaraba que existía una campaña para desacreditar el gobierno y que no estaba dispuesto a ceder “ante las presiones, ante las amenazas y, mucho menos aún, ante el chantaje ideológico”.⁹

A finales de julio, se alcanzó cierta distensión política mediante el compromiso del presidente provisional, Raúl Lastiri, del ministro del Interior, Benito Llambí y, de José Ignacio Rucci, de no intervenir la provincia ni la CGT regional a cambio de la obligación de A. López de reunificar las “62 Organizaciones” cordobesas garantizando la participación igualitaria del sector ortodoxo. El acuerdo fue altamente costoso para el líder de los tranviarios quien se encontraba entre la presión de las autoridades nacionales y la lealtad a sus aliados locales. Finalmente, la reunificación de las 62 se llevó a cabo el 27 de julio en la colonia de vacaciones de la UOM, en la serrana ciudad de Valle Hermoso.¹⁰ En virtud de este pacto, el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, afirmó, en respuesta a las palabras de Tosco: “Córdoba será la capital del peronismo. Esta unidad es un compromiso, o se es peronista o se es un traidor”¹¹.

⁸ Revista *El Descamisado*, Buenos Aires, Año I, Nº10, 14-7-73.

⁹ Diario *Córdoba*, 3 y 14-7-73

¹⁰ Con la presencia de Lorenzo Miguel y del ministro de Trabajo, Ricardo Otero, se resolvió repartir los cargos de la mesa directiva en forma igualitaria entre los sectores legalistas y ortodoxos, lo que significaba que estos últimos participarían en la conducción de la CGT que debía renovar sus autoridades en un futuro próximo.

¹¹ Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 29-7-73.

Evidentemente, la disputa política entre “leales contra traidores” planteaba la lucha en términos de discurso moral. En este terreno, la lucha se libraba entre el bien y el mal, y cada parte se arrogaba la autoridad para incluir a los “auténticos compañeros” y excluir un OTRO devenido en enemigo al que había que erradicar. En esta situación, los legalistas, como afirma James Brennan, “se encontraban ahora en la situación de tener que compartir el poder con sindicatos cuyas metas manifiestas eran la recuperación de la CGT cordobesa para el movimiento obrero peronista y la purga de sus refractarios miembros independientes y clasistas.”¹² Tosco y Salamanca, por su parte, en un intento por recrear el movimiento obrero alternativo, formaron el Movimiento Sindical Combativo (MSC).

La brecha abierta entre los distintos sectores del sindicalismo local, se profundizó con la intransigencia de sus posturas políticas, situación que colocó a López en el papel de contrapeso, como se evidenció en el conflicto desatado en agosto de 1973 en las plantas de Fiat. En el largo conflicto sobre el encuadramiento sindical de los trabajadores de la empresa italiana, el Ministerio de Trabajo dispuso que la jurisdicción correspondía a la UOM, desconociendo los resultados del referéndum realizado por Salamanca a fines de junio por el cual los trabajadores se expresaron a favor del SMATA. Como repudio a las decisiones centrales, el día 21 los trabajadores de Concord-Fiat ocuparon la fábrica y exigieron la afiliación al SMATA. En su apoyo, los obreros de Perkins y otras plantas del sindicato abandonaron sus tareas, al igual que los obreros de Luz y Fuerza que se solidarizaron con una huelga. Al día siguiente, fecha aniversario de los mártires de Trelew, miles de operarios ocuparon las plantas de Fiat en Ferreyra. Militantes de izquierda, del movimiento estudiantil y de las organizaciones guerrilleras -el ERP, por ejemplo- se hicieron presentes en las puertas de acceso a la fábrica expresando su adhesión a la protesta de los trabajadores. La ocupación terminó tres días después con la intercesión de las autoridades provinciales.

El gobierno de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, presionados por un lado por la empresa, el gobierno nacional y la UOM y, por otro lado, el SMATA local y el conjunto de los gremios clasistas e independientes, mediaron ante la Fiat de quien obtuvieron el compromiso de no sancionar a los ocupantes, permitiendo que Salamanca gestionara ante el Ministerio de Trabajo el respeto a la voluntad de los trabajadores en relación a su encuadramiento sindical.

En síntesis, cada vez resultaba más difícil para los sindicatos disidentes mantener el control de sus espacios de poder, perjudicados, entre otros factores, por la política nacional que proyectaba la restauración de las bases ortodoxas del movimiento obrero. La disputa en torno a la conformación del futuro secretariado de la central obrera fue el eje del conflicto. Mientras los ortodoxos proponían que debía estar integrado solamente por peronistas, los legalistas consideraban que debía surgir democráticamente del plenario de gremios y acatar lo que las bases expresaran a través de sus sindicatos.

¹² James Brennan, *El cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1996, p.320.

Finalmente, el congreso normalizador se llevó a cabo el día 28 de febrero –día del levantamiento del jefe de policía, Antonio Navarro-, en la cercana ciudad de Alta Gracia, con la presencia del secretario adjunto de la CGT nacional, Raúl Ravitti, y del ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Apelando a vagos argumentos legales, habían quedado excluidos los sindicatos de Luz y Fuerza, al Sindicato de Empleados Públicos y al Sindicato de Motores Diesel Livianos.¹³ Como respuestas ante la proscripción, legalistas, independientes, clasistas, con el apoyo de la JTP, convocaron para el mismo día un acto de repudio frente al local de la CGT en la ciudad de Córdoba. Por cierto, los sucesos desatados por la acción del Jefe de Policía obligaron a suspender la concentración.

Con el fin de acabar con “*el juego de una CGT escandalosa o inexistente*” y adherir a los lineamientos de la política nacional, se conformó el nuevo secretariado de la regional, integrado plenamente por el sector ortodoxo, con el reconocimiento en pleno de la CGT nacional y el ministerio de trabajo del gobierno nacional.

Los gremios legalistas, independientes y clasistas desconocieron a las nuevas autoridades y las calificaron de “*secretariado burócrata y minoritario*”. La burocracia sindical había recuperado terreno y se transformó en la única representante de las fuerzas obreras organizadas reconocida por el Estado.

3.2. La interna peronista

El 1º de octubre de 1973, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ) emitió la orden reservada por la cual se impartieron directivas a los delegados del en las provincias para enfrentar “*la guerra desencadenada contra nuestras organizaciones y nuestros dirigentes por los grupos marxistas, terroristas y subversivos*”.¹⁴ Estas instrucciones fueron una luz verde para aumentar la ofensiva tendiente a desplazar a la izquierda peronista de los gobiernos provinciales.

El decálogo de instrucciones fue acompañado, en el mismo mes, con el anuncio de la restructuración del Movimiento Justicialista, cuyo objetivo expreso era dismantelar y depurar aquellos espacios ocupados por los sectores disruptivos aplicando la más rígida disciplina en su interior. Igualmente, se reformó la Carta Orgánica por el cual se prorrogó el mandato de los congresales a cuatro años y se autorizó al CSMNJ a intervenir los distritos “*si ello hiciera falta*”. A su vez, el congreso partidario, reunido en febrero de 1974, emitió un documento repudiando la actividad subversiva y a todos los que desde la función pública permitieran la presencia de “*elementos interesados en destruir nuestro movimiento.*”¹⁵

¹³ Las autoridades de la CGT habían resuelto que en el padrón respectivo para normalizar la CGT regional de Córdoba sólo estarían contemplados los sindicatos adheridos a federaciones o que guardasen relación directa con la CGT. De esta manera, los sindicatos de Luz y Fuerza y el de Empleados Públicos no podían participar por estar suspendida su afiliación a la federación que los nucleaba.

¹⁴ Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 2-10-73.

¹⁵ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 10-2-74

Estas medidas justificaron la ofensiva desatada por la oposición ortodoxa al gobierno provincial acusado de permitir infiltrados. Por cierto, en ocasión del acto organizado por la III regional de la JP para conmemorar el aniversario del 17 de octubre, que contó con la adhesión del gobernador, Ricardo Obregón Cano, y del ex presidente, Héctor Cámpora, los principales oradores, Roberto Quieto (FAR) y Mario Firmenich (Montoneros) criticaron a "ciertos sectores del movimiento" por "haberse olvidado de la consigna Liberación o Dependencia." El CSMNJ consideró que las palabras enunciadas por Quieto y Firmenich durante la celebración del acto agraviaron la figura del General Perón y, se acusó al gobernador y al ex presidente de avalar con su presencia tal mensaje.

El 30 de octubre el mismo Perón aconsejó al CSMNJ no tomar medidas drásticas. Y si bien la situación tendió a resolverse, días después las autoridades del Consejo difundieron un comunicado en el que dejaban claramente expreso que resultaba imprescindible establecer definitivamente quienes integraban "*lealmente nuestras filas, abrazan desinteresadamente la doctrina justicialista y cumplen fielmente las directivas de nuestro jefe.*" La advertencia se hizo aún más explícitas cuando señaló que "este Consejo no vacilará" en aplicar "*las sanciones más energicas, toda vez que, con actitudes equívocas se intente desvirtuar la claridad de nuestras intenciones,*"¹⁶ Disciplina, unidad y verticalidad eran las directivas impartidas por Perón hacia el movimiento y hacia los gobernantes. Se los conminaba a transitar en la más pura ortodoxia peronista.

Al finalizar 1973, y después de siete meses de gobierno, las autoridades provinciales, no habían logrado disminuir los factores de presión que incidían en la capacidad de maniobrar políticamente. Jaqueado por los problemas internos, la política centrista defendida por Obregón Cano, en lugar de generar espacios de concertación y negociación, provocó una mayor dispersión de las fuerzas, sobre todo de aquellas que habían contribuido a constituir las bases de poder del gobierno provincial.

En el mes de diciembre, el CSMNJ designó a Luis Longhi como delegado interventor al Partido Justicialista de Córdoba en reemplazo del dirigente local Leonardo Obeid.¹⁷ Longhi asumió su nueva función anunciando que no iba a admitir "*ningún tipo de desviación ni infiltración en el peronismo.*"¹⁸ Señaló que la depuración ideológica y su aplicación en Córdoba iban a consistir en que "*cada peronista defienda consciente, auténtica y valientemente todos los postulados enunciados por Perón.*"¹⁹ Con el mismo tono se expresó Martiarena, secretario general del CSMNJ, cuando puso a cargo al nuevo delegado: "*los peronistas deben estar ideológicamente en una sólo línea, la de Perón. Vamos a defender la pureza ideológica del movimiento*"²⁰. Las primeras acciones de Longhi dejaron en evidencia que el delegado interventor era más proclive a una alianza con la oposición

¹⁶ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 30-10-73.

¹⁷ Luis Longhi era abogado de la UOM y en octubre de 1973 había sido designado por Perón como delegado regional por Córdoba al consejo directivo de la CGT.

¹⁸ Diario *Córdoba*, 16-12-73.

¹⁹ Archivo Fílmico de Canal 10 (AFC10), Fondo documental del Departamento de Cine y Televisión, Escuela de Artes, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Año 1973.

²⁰ Diario *Córdoba*, Córdoba, 16-12-73.

obregonista que con las autoridades provinciales. De hecho, su primera reunión fue con Antún y la dirección en pleno de la MRPP.²¹

Pero, también, miembros del equipo de gobierno de Obregón Cano comenzaron a cuestionar las políticas gubernamentales. El secretario general de la gobernación, Jorge Dall'Aglio planteó al ministro de gobierno, Erio Bonetto, la necesidad de llevar adelante una acción conjunta para revertir la orientación del gobierno peronista.²² El otrora colaborador del gobernador durante la campaña electoral, el diputado nacional, Carlos Palacios Deheza, declaró que *“tanto en el orden provincial como nacional, el peronismo de Córdoba está tan marginado como durante la dictadura.”*²³ Estas expresiones eran interpretadas por la prensa de la época como un definitivo alejamiento de ambos dirigentes. Similares actitudes asumieron el senador nacional, Luis Carnevale, y el senador provincial, Erico Tejeda, quienes constituyeron un frente común con el ex gobernador Auchter, el ex intendente Obeid, la diputada nacional Arminda Zuleta de Arraya, debido a sus permanentes desencuentros con la conducción política-gubernativa.²⁴

No menos insidiosas fueron las críticas de la izquierda peronista, principal motor de fuerza y movilización del gobierno de Obregón Cano. Por cierto, hacia fines de 1973, dio claras señales de distanciamiento con respecto a las políticas del gobierno. Así, la revista *Militancia Peronista para la Liberación*, dirigida por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde, manifestó que causaba malestar, en la expectativa popular, *“la vacilación y la parálisis”* de las autoridades provinciales. Señalaban que la palabra intervención se había instalado tempranamente, desde el primer día de gobierno y que, ese fantasma, –más intenso en el momento que daban el golpe contra Cámpora- en lugar de actuar como acicate para un gobierno con tal aval popular desarrollar una política agresiva, obró como un dique frenador y paralizante:

“A la amenaza se responde con vacilación. Vacilación que será la característica de este gobierno con miedo.

“Vacila el gobernador, repartiendo ministerios y puestos claves a personas inodoras (sic) e incoloras, sin línea alguna de gobierno y más apegados a la seguridad de sus sillones de funcionarios que a la tarea profunda basada en la movilización de un pueblo decidido. (...) También vacila el compañero López ante esa sombra amenazante que se delectaba Intervención. Y es el caso de la negociación para la reorganización de las “62” organizaciones, donde la figura de un burócrata adquiere relieves nítidos: Don Lorenzo Miguel”

²¹ Roberto Ferrero, *El Navarrazo y el gobierno de Obregón Cano*, Córdoba, Alción Editora, 1995, p.75.

²² Véase Roberto Ferrero, *Ob. Cit.*, pág. 84

²³ Diario *La Nación*, Buenos Aires, 7-1-74.

²⁴ Diario Córdoba, 11-12-73 y Diario *La Nación*, Buenos Aires, 27-1-74.

“Y la vacilación – mala consejera en política – trae como consecuencia una unificación, como si fuera posible unificar leales y traidores, como si fuere posible olvidar donde estuvieron en estos años de trinchera (...).”²⁵

Por cierto, la oposición antiobregonista había reunido a actores de gravitación social y política de la provincia, con gran poder de presión y veto. Su crecimiento estuvo alimentado por los desaciertos de una política gubernamental que no lograba resolver las presiones contradictorias que pesaban sobre él, restándole márgenes de gobernabilidad. Por otra parte, sus principales bases de apoyo y alianzas también comenzaron a mostrar signos de resquebrajamiento. En cada conflicto que se avizoraba, resurgía la posibilidad de la intervención federal como salida institucional para resolver las contradicciones internas del campo peronista. El gobernador se aferró a la única fuente de legitimidad que podía llegar a reconocer la oposición peronista. Esto es, no dejó de insistir y reiterar, una y otra vez, su lealtad “incondicional” al Presidente de la Nación.

4. La caída

El estado de inquietud prevaleciente en los círculos políticos se profundizó en los primeros meses de 1974 con la publicación, en el diario local *La Voz del Interior* de una carta del ex subjefe de Policía, Tte. Cnel. Julián Andrés Chiappe, en la que acusaba a Navarro, Jefe de Policía de la Provincia, de mantener *"reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia"*, al mismo tiempo que lo hacía responsable de una serie de escándalos de corrupción.²⁶

En rigor de verdad, eran conocidas, desde hacía tiempo, las reuniones de Navarro con dirigentes peronistas opositores al gobierno provincial, entre los que se contaban a los miembros de la agrupación interna liderada por Julio Antún y dirigentes de las "62 organizaciones" ortodoxas.

Como complemento a la carta abierta de Chiappe, nuevas acusaciones de la oposición peronista preocuparon a las filas gubernamentales. El interventor partidario, Luis Longhi, advirtió enfáticamente que *"se equivocan quienes en el justicialismo creen que sus cargos y honores son vitalicios"* y afirmó que erradicaría con la ayuda de los cordobeses a *"los infiltrados, cualesquiera sea la jerarquía o los cargos"*. Bernabé Barcena, dirigente sindical de los molineros y del grupo ortodoxo, señaló, en una clara línea de ruptura, que: *"Quienes acometan actitudes provocativas para profundizar los problemas de*

²⁵ Revista *Militancia Peronista para la Liberación*, Año I, N° 15, 20-9-73.

²⁶ En la carta abierta publicada en el matutino local, Chiappe acusó al Jefe de Policía de haber distraído fondos de la repartición en su beneficio particular, de haber usado automóviles oficiales con el mismo objeto y de haber organizado atentados a diarios y políticos enemigos. Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 16-2-74. Posteriormente Chiappe ratificó sus denuncias ante el fiscal del 9° Turno de Capital, Dr. José Pérez Villalobos. Datos extraídos de Roberto Ferrero, *Ob. Cit.*, p.104.

Córdoba, no contarán con nuestra complicidad, ya que no estamos dispuestos a permitir que Córdoba quede aislada, al servicio del antiperonismo."²⁷

El gobernador alertado por las acusaciones de Chiappe y por los comentarios del ministro de Educación, Carlos Tagle Achaval y del director del Banco Social, Raúl Faure, acerca de un posible golpe para derrocarlo, el 27 de febrero, ordenó el relevo del Jefe de Policía. Dos decretos firmados el mismo día separaron y exoneraron a Navarro de sus funciones quien, lejos de acatar la disposición gubernamental, respondió con la desobediencia y el acuartelamiento.²⁸ Se sumaron a la actitud de Navarro, los jefes del Cuerpo de Bomberos, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería.

Coparon las principales radios de la capital y empezaron a transmitir comunicados policiales exigiendo la renuncia del gobernador y sus colaboradores. Mientras se hacía pública la rebelión policial, las calles céntricas de la ciudad comenzaron a ser custodiadas por grupos armados identificados con brazaletes celestes y blancos, comandados por la Juventud Sindical Peronista, organización juvenil del sector ortodoxo del gremialismo local.

En una línea de acción ofensiva, y alegando que había recibido la denuncia de que estaban repartiendo armas a civiles en la Casa de Gobierno, Navarro ocupó la sede oficial del Gobierno provincial, deteniendo al gobernador, al vicegobernador, al ministro de Gobierno, Erio Bonetto, al ministro de Bienestar Social, Antonio Lombardich y a 86 funcionarios. Según las argumentaciones del Jefe de Policía, su actitud había obedecido al deseo de controlar *"las fuerzas enroladas en la extrema izquierda quienes iban a provocar un desborde total"*²⁹.

Simultáneamente se desató la represión y persecución a dirigentes peronistas y gremiales que habían apoyado el gobierno de Obregón Cano, lo mismo que a activistas estudiantiles de izquierda. Así ilustraba la Revista montonera *Militancia Peronista para la liberación*, la escena de las calles cordobesas, reproducida en la página siguiente:

²⁷ Diario *Córdoba*, 16 y 22-2-74.

²⁸ Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba (AGPC), Año 1974, Tomo 12, Decretos N° 740 y 743.

²⁹ Revista *Gente y Actualidad*, *Testimonios de 1.035 dramáticos días*, 20-9-76.



30

Ante la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, Norberto Erico Tejada, le correspondió a Mario Dante Agodino, presidente de la Cámara de Diputados, asumir como gobernador de la Provincia, con el apoyo del bloque de legisladores del FREJULI y la UCR. Sus primeras declaraciones señalaron que había asumido con el aval del gobierno nacional y de las máximas autoridades partidarias, y que la rehabilitación de los funcionarios depuestos sería materia de consulta con el organismo partidario.³¹ Trató de desprenderse del accionar de Navarro, argumentando que la situación competía a la Justicia, pero en la ceremonia de su juramento estuvo presente el Jefe de Policía junto a otras figuras del sector antiobregonistas.³²

³⁰ Revista *Militancia Peronista para la Liberación*, Buenos Aires, Año II, N° 36, 7-3-74

³¹ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 1-3-74.

³² Durante la ceremonia se vivió a Navarro con cánticos como "NAVARRO, NAVARRO, SOLDADO DE PERON", o bien "PERONISTAS, NI YANQUIS NI MARXISTAS", "Y CAYO, Y CAYO, EL TIRANO DE

El 1º de marzo firmó el decreto convocando a elecciones para "*completar el proceso tendiente a la normalización institucional*"³³ y dio por terminadas las funciones de varios ministros. Ese mismo día, el juez federal, Zamboni Ledesma, decretó la libertad de los detenidos. Liberados, dieron a conocer un comunicado en el que procedían a reasumir el Poder Ejecutivo con sede provisoria -y desconocida- junto a la totalidad de los ministros, a excepción del ex ministro de Obras Públicas, Arq. Luis Esterlizzi y, del ex secretario general de la gobernación, Jorge Dall 'Aglío, quienes, luego de su renuncia, declararon su reconocimiento al gobierno de Agodino. La provincia tenía dos gobernadores.

El 3 de marzo, la plana mayor del obregonismo se trasladó a Buenos Aires e instalados en el City Hotel concertaron una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Raúl Lastiri. Allí se los indujo a renunciar.³⁴

El presidente de la República, Juan D. Perón, por su parte, con fecha del 1º de marzo, envió al Congreso de la Nación el proyecto de intervención a la provincia. Para Perón, Córdoba "*había entrado en un período de absoluta falencia institucional.*" La condena no recayó sobre el accionar del Jefe de Policía, sino sobre las autoridades gubernamentales que habían "*tolerado*" la presencia de elementos perturbadores y fomentado situaciones conflictivas. El Presidente convalidó el atentado de Navarro. Tiempo después, el ex jefe de policía, acusado de sedición, privación calificada de la libertad, usurpación de propiedad y usurpación de autoridad, fue premiado con un cargo en el consulado argentino en Barcelona mediante un decreto reservado.

Frente al proyecto de intervención federal enviado al Parlamento, la mayoría de las fuerzas políticas demandaron al gobierno la restitución de las autoridades a sus cargos legítimos, a excepción de algunas organizaciones peronistas que acordaron con la medida dispuesta.

En esta última línea de pensamiento, se ubicó el dirigente de la MRPP, Julio Antún, quien adhirió públicamente al pronunciamiento efectuado por las fuerzas policiales y apoyó la intervención por considerar que era el "*único remedio a la situación de caos, violencia, inoperancia, y negociados*" producto de la "*desastrosa gestión de los mandatarios depuestos*"³⁵. Según la revista *Panorama*, para la gente de Jorge Antún, "*sólo un militar tendría representatividad y autoridad suficiente para detener la mano de los bolches*". En sus apreciaciones, este grupo habría estado pensando como posibles interventores al propio Navarro u Osinde.³⁶ En la misma dirección, Luis Longhi, delegado normalizador del Partido Justicialista, pidió que apoyaran la intervención para encauzar la

OBREGON; Y CAYO, Y CAYO, EL DISFRAZADO DE OBREGON". AFC10, Año 1974.

³³ La convocatoria se realizó de acuerdo a los artículos 99 y 100 de la Constitución Provincial en la en los que se establecía que ante impedimentos o renuncia del Gobernador, Vice Gobernador y Vice Presidente del Senado corresponde al titular de la Cámara baja ejercer la primera magistratura, quien convocará dentro de los tres días a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre que en éste falte cuando menos un año y que la separación o impedimento del Gobernador y Vice Gobernador fuese absoluta. AGPC, Año 1974, T.12, Decreto N° 750, 1-3-74.

³⁴ Declaraciones de Carlos Tagle Achaval al Diario *Página/12 Córdoba*, 27-2-94.

³⁵ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 1 y 5-3-74.

³⁶ Revista *Panorama*, Buenos Aires, Año XI, N°354, 7-13 de marzo de 1974.

provincia dentro de la normalidad institucional y jurídica.³⁷ Igualmente, Martiarena, titular del CSMNJ, solicitó a las autoridades partidarias de la provincia que realizaran un llamado a la unidad del peronismo local y a todos los partidos políticos, sin excepción alguna *"para que den su máximo apoyo a la intervención federal."*³⁸

En posiciones antagónicas, varias agrupaciones políticas repudiaron el levantamiento policial y se pronunciaron en contra de la intervención federal. Así, por ejemplo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Movimiento Nacional Yrigoyenistas, Partido Comunista Revolucionario, Partido Comunista Maoísta, Frente Revolucionario Peronista, Centro de Trabajadores Peronistas, Unión del Pueblo Argentino, Partido Federalista, Partido Demócrata de Córdoba, Frente de Izquierda Popular, Partido Popular Cristiano, Partido Socialista Democrático, Alianza Popular Revolucionaria, Partido Revolucionario Cristiano, entre otros. La UCR provincial sostuvo que el levantamiento policial respondía a la *"desorientación que impera en el país, debido en su mayor parte al desencuentro ideológico del oficialismo y a las luchas intestinas que se advierten en su seno."*³⁹ Desde el Congreso Nacional, los legisladores radicales propusieron la intervención pero *"a fin de reponer en sus funciones al gobernador y vicegobernador de la provincia y demás autoridades destituidas."*⁴⁰ Alfonsín, dirigente de la corriente interna Movimiento de Renovación y Cambio, criticó el legalismo que defendía la UCR al que calificó como erróneo e infantil: decir que *"se trata de problemas internos del peronismo es hacer de Poncio Pilatos."*⁴¹ El ex presidente, Arturo Humberto Illia, por su parte, reflexionaba sobre el episodio con cierto escepticismo. Se preguntaba cómo podía admitirse que en el momento de la toma de juramento del diputado Agodino, el Tribunal Superior de Justicia admitiera la presencia del Teniente Coronel Navarro,

*"¿No es acaso un sedicioso? Pienso, por otro lado, que hubiera sido sumamente asombroso que los militares hubieran abandonado los cuarteles para reponer a un gobernador constitucional, esa actitud hubiera quebrado la regla dorada de los militares argentinos, que sólo salen del cuartel para deponer gobiernos. En verdad, perdieron, esta vez, la oportunidad de establecer una excepción extraordinaria".*⁴²

Ninguna de las posiciones sostenidas por los dirigentes de la UCR logró traspasar el acuerdo entablado entre Balbín y Perón luego de la entrevista mantenida el 2 de marzo. En esa ocasión, el máximo dirigente radical declaró que la situación política

³⁷ Diario *Los Principios*, 6-3-74. La postura del interventor partidario fue cuestionada posteriormente por los miembros de la Junta Provisoria quienes lo declararon "persona no grata" y pidieron su relevo por considerar que estaba al servicio de la Tendencia y colaboraba con el gobierno marxista de Obregón Cano". Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 7-3-74.

³⁸ *Ibíd.*

³⁹ Documento redactado por el comité provincial de la UCR. Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 2-3-74.

⁴⁰ Dictamen de comisión en minoría firmado por el Senador radical Fernando de la Rúa. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Año 1974, T.IV, p.3638.

⁴¹ Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 1-3-74.

⁴² Revista *Liberación*, Córdoba, N° 18, 1974.

provincial se había modificado y que en su opinión Obregón Cano no reasumiría sus funciones.⁴³ El acuerdo había establecido que sólo se interviniera el Poder Ejecutivo de la provincia, con la promesa del Presidente de respetar el poder legislativo y judicial.

¿Cuál fue la reacción del peronismo revolucionario, principales fuerzas de apoyo del gobierno provincial? Si bien reclamaron la reposición en sus funciones de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, y exigieron el castigo a los responsables del golpe y el fin de la represión a las unidades básicas, también reprocharon las debilidades del gobernador por no "recurrir a las bases" y creer en los "arreglos burocráticos o en las trenzas de Buenos Aires."⁴⁴ En la revista *El Descamisado*, el dirigente juvenil de la JP de Córdoba, Ricardo Panzetta sostenía que algunos errores se pagaban muy caros y que "Obregón Cano cometió el error de negociar, cuando tenía que haber movilizado."⁴⁵

La revista *Militancia Peronista para la Liberación* interpretaron los sucesos de Córdoba como parte del proyecto de la "Patria Metalúrgica" que necesitaba la violencia criminal y la desmovilización para su viabilidad. Según su lectura, la conspiración en Córdoba se asentaba sobre dos ejes unificados ideológica y políticamente: Por un lado, el sector ortodoxo de las 62, "mezcla de burócratas fascistas, parásitos sociales y delincuentes" y, por el otro, "los sectores de derecha del peronismo político liderados por el "turco" Antún y organizados alrededor de la Mesa Redonda Peronista Permanente". Pero, aún más, el verdadero apoyo, la garantía de la sublevación de Navarro, la tenía en Buenos Aires, en el ámbito de Poder Ejecutivo y en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Tercer Cuerpo.⁴⁶

5. A modo de síntesis

¿Cumplió la renuncia de los gobernantes con los objetivos del levantamiento policial? ¿Se trató de una rebelión espontánea de la policía o una operación política organizada desde el ámbito del gobierno nacional? ¿Es posible imaginar que el Presidente de la Nación ignorara que en la provincia de Córdoba se iba a producir un golpe de estado? Por cierto, nadie podía pasar por encima de la autoridad del anciano líder. Si el Presidente estaba decidido a desplazar al gobernador le hubiera bastado apenas una sugerencia a Obregón Cano –un hombre leal al presidente- y él hubiera renunciado a su cargo, pero ¿por qué el General dejó que se produjera el episodio? Quizás, como plantea Sergio Buffano, porque quería demostrar explícitamente que estaba dispuesto a recurrir a todos los métodos necesarios para imponer su orden político.⁴⁷

El derrumbe de un gobierno electo, el desplazamiento de los sectores radicalizados, la consolidación de la burocracia sindical, la persecución de dirigentes gremiales, fueron solo algunas de las aristas que sé presentaron en la convulsionada Córdoba a inicios del tercer gobierno peronista. Instalado el nuevo gobierno, se

⁴³ Diario *La Voz del Interior*, 3-3-74.

⁴⁴ Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 5-3-74.

⁴⁵ Revista *El Descamisado*, Buenos Aires, Edición Extra, 14-3-74.

⁴⁶ Revista *Militancia Peronista para la Liberación*, Buenos Aires, Año II, N°36, 7-3-74.

⁴⁷ Sergio Bufano "Perón y la Triple A" en *Lucha Armada en la Argentina*, N°3, 2005.

conjugaron una serie de factores que condicionaron el rumbo y las políticas posibles. La autoridad del gobierno se fue erosionando a raíz de la multiplicación de los nudos conflictivos y de la formación de un arco opositor que incluyó a actores políticos y sociales de gran peso en la sociedad cordobesa.

Al respecto, es interesante la observación analítica del sociólogo Francisco Delich, publicado en el matutino *La Opinión* en oportunidad de la caída de Obregón Cano y Atilio López. Allí, Delich enumeraba una serie de medidas de relevancia que habían agudizado los conflictos de la provincia: regulación del comercio de la carne, la reorganización de los cuadros policiales, los derechos de los docentes privados y el aumento de sueldo de los obreros del transporte. Según el autor, el gobierno provincial no supo encontrar el camino para satisfacer las demandas de orden y eficiencia de las clases medias urbanas y las reivindicaciones de los sectores populares más sumergidos.⁴⁸

Desde esta clave analítica, la crisis provincial de marzo del 74 debe leerse en este contexto. En primer lugar, cabe precisar que el gobierno de Obregón Cano y Atilio López no representaba de modo predominante, ni mucho menos exclusivo, al peronismo revolucionario. Si bien, la fórmula gubernamental del FREJULI contó con el apoyo de la izquierda peronista, fundamentalmente de la Juventud Peronista y los Montoneros, una vez en el gobierno, las nuevas autoridades definieron una política de alianzas dirigidas hacia el “centro”. La tendencia del gobierno provincial a ocupar la posición central del espectro político (que no se traducía necesariamente en términos ideológicos) tuvo como contraparte la existencia de dos oposiciones bilaterales incompatibles entre sí y mutuamente excluyentes: el peronismo revolucionario y la derecha política-sindical, cuyas fisuras profundizaron la polarización de la opinión política y minaron el consenso inaugural del régimen. Desde este punto de vista, predominaron los impulsos centrífugos conducentes a medidas extremistas por sobre los centrípetos, que son precisamente los impulsos moderadores y de salidas concertadas.

En segundo lugar, es posible advertir que frente a la polarización se produjo un debilitamiento del “centro posicional”, producto también de la autonomía limitada de Obregón Cano ante la dependencia de un liderazgo carismático (Perón). El resultado fue la imposibilidad de llevar adelante iniciativas políticas con capacidad para resolver los problemas básicos con los que se enfrentaba el gobierno y satisfacer las demandas de la sociedad.

En otros términos, resultó sus contradicciones fueron impugnadas por los distintos sectores del peronismo, en tanto las medidas políticas formuladas no alcanzaban los resultados deseados ni para el peronismo revolucionario ni para la derecha política-sindical.

Mientras el conjunto del arco político discurría en sus interpretaciones, el 12 de marzo de 1974, el Presidente Juan D. Perón designó como Interventor Federal a Antonio Duilio Brunello.⁴⁹ La misión encomendada era ordenar la provincia. Según declaraciones

⁴⁸ Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 7-3-74.

⁴⁹ Ocupaba el cargo de Secretario de Promoción y Acción Social del Ministerio de Bienestar y Acción Social de

del flamante interventor, la situación había planteado la opción entre el tiempo y la sangre: "se ahorró sangre, pero, además no se perdió tiempo". Era necesario, afirmaba, para no fracasar en la liberación, "acatar la conducción de quien ha visto mas lejos, el General Perón: agruparnos a su lado y seguirlo sin vacilaciones, ese es el curso necesario de la Revolución Nacional"⁵⁰. El interventor dejaba en claro cual iba a ser su política: "acatar y disciplinarse."

En efecto, el proyecto de intervención operó como un mecanismo de legitimación al golpe policial, por el cual, la derecha peronista derrumbó un gobierno acudiendo a la policía, estimulando la participación de una fuerza armada del Estado en política. En otras palabras, se utilizó la intervención de las fuerzas de seguridad para resolver los conflictos internos del peronismo, en defensa de los intereses de los grupos excluidos del poder provincial. Por otro lado, el "navarrazo" actuó como marco legitimador para la organización de la represión paraestatal. Porque, si en el ámbito nacional, desde los sucesos del 20 de junio se había legitimado la impunidad, en Córdoba, fue desde la destitución de las autoridades y el aval político de las autoridades nacionales lo que condensó el inicio de la impunidad. La funcionalidad de la intervención federal debe leerse en el marco de este conflicto, donde la derecha peronista desplazó a la izquierda política revolucionaria valiéndose de todos los métodos, legales o extralegales. Fue, también, un recurso del gobierno central para disciplinar políticamente al partido de gobierno y desmovilizar a los actores sociales radicalizados, eliminando, con ello, el ciclo de protesta y movilización de la sociedad argentina iniciado en 1969, de allí que muchos interpretaron el "navarrazo" como "contracordobazo".

Igual suerte corrieron los gobiernos de otras provincias. El objetivo de desplazar a los infiltrados y depurar al peronismo se hizo también extensivo a Antenor Gauna, gobernador de Formosa, destituido en noviembre de 1973; Oscar Bidegaín, gobernador de Buenos Aires, obligado a renunciar en enero de 1974; Alberto Martínez Baca, gobernador de Mendoza, sometido a juicio político y luego intervenido en agosto de 1974; Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz, desplazado en octubre de 1974 y, Miguel Ragone, gobernador de Salta, provincia intervenida en noviembre de 1974. En ocasión de esta última intervención, el diario capitalino *La Opinión* tituló la noticia: "Cayó el último gobernador con sustento de izquierda."⁵¹

la Nación

⁵⁰ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 16-3-74

⁵¹ Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 23-11-74